ACTA NÚMERO 011/2018

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EN FECHA DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ASISTENTES A LA SESIÓN

Alcalde-Presidente:

D. SALVADOR COSTA ESCRIVÀ

Concejales:

D. VICENTE M. APARISI MINGARRO
D. CARLES CATALUNYA MELCHOR
D. ALBERTO FERNÁNDEZ FRASQUET
D^a ASUNCIÓN GARCÍA MARCOS
D. ANTONIO MUÑOZ OTEROS
D. JOSÉ M. RISCO CAMACHO
D. GREGORIO TIRADO DE MIGUEL

No asiste y excusa su asistencia:

D. SERGIO ANDRÉS GARCÍA
D^a ELVIRA ORÓN ORÓN

No asiste y no excusa su asistencia:

Secretaria:

D^a María Sánchez Cózar

En el Municipio de Gilet, a las 20:00 horas del veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se reúnen en primera convocatoria y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los Sres. Concejales que al margen se expresan al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, previa convocatoria efectuada con la antelación reglamentaria establecida por el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de la que ha sido dada publicidad mediante la fijación de un ejemplar de la convocatoria y orden del día en el Tablón de Edictos de esta Casa Consistorial.

Los asistentes a la sesión representan el quórum legalmente establecido para la válida constitución del Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión ordinaria, y tratar sobre los asuntos que constan en el orden del día que, junto con la convocatoria, les ha sido entregado en forma reglamentaria.

Abierta la sesión por la Presidencia, se procede al estudio de los asuntos a tratar con arreglo al siguiente **ORDEN**:

PRIMERO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2018:

En el uso de la palabra, el Sr. Alcalde pregunta a los asistentes a la sesión si tienen algo que objetar al acta de la sesión de fecha 15 de noviembre de 2018.

No habiendo objeciones, se acuerda por unanimidad la aprobación del acta de la sesión de fecha de fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, ordenándose seguidamente su transcripción al libro oficial de actas.

SEGUNDO.- ESCRITOS, INFORMES Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA:

Por la Alcaldía se da cuenta de las Resoluciones número 459/2018 a la número 525/2018, ambas inclusive.

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.

A continuación, el Sr. Catalunya da lectura a informe de Secretaría de 18 de noviembre de 2018.

En el uso de la palabra el Sr. Alcalde dice a los asistentes a la sesión que el Convenio firmado en 2013 con los hermanos Sancho Pérez era de imposible cumplimiento porque el Ayuntamiento no tiene suelo edificable, por lo que, tras varias reuniones con ellos, se alcanzó un nuevo acuerdo que ha supuesto un ahorro para las arcas municipales de 76.950,53.-€

Continúa el Sr. Alcalde diciendo que además se ha producido un ahorro de 344.953,36.- € en la ejecución de la Sentencia del Campo de Fútbol al haberse ejecutado el aval constituido por el agente urbanizador.

Concluye el Sr. Alcalde diciendo que la actuación municipal ha producido un ahorro en el presente ejercicio de 421.903,89.-€

TERCERO.- ACUERDO, EN SU CASO, RELATIVO A RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Visto que con fecha 19 de noviembre de 2018 se inició procedimiento para el reconocimiento extrajudicial de créditos.

Visto que con la misma fecha, se emitió por intervención informe para valorar la viabilidad del reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Ayuntamiento Pleno, con 5 votos a favor, 2 abstenciones (PP y Compromís) y 1 en contra (IU) adopta el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan seguidamente y cuyas facturas obran en el expediente:

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220170004690	OPA	2018 934 22708	58.844,70	RECAUDADOR MUNICIPAL	TASA GESTION RECAUDATORIA EJERCICIO 2017
220170004691	OPA	2018 1622 22799	39.917,76	RECICLADOS PALANCIA BELCAIRE	CONVENIO ABONO FACTURA 6D/0153
220170004719	OPA	2018 1622 22799	19.508,88	RECICLADOS PALANCIA BELCAIRE	CONVENIO ABONO FACTURA 6D/0153 - SEGUNDO PAGO
220170004720	OPA	2018 934 35200	30.805,67	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA COMUNITAT VALENCIANA	PRIMER PAGO CALENDARIO PAGOS INTERESES DEVOLUCION EJECUCION DEFINITIVA 4/000981/2009-MA
220170004721	OPA	2018 934 35200	30.805,67	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA COMUNITAT VALENCIANA	SEGUNDO PAGO CALENDARIO PAGOS INTERESES DEVOLUCION EJECUCION DEFINITIVA 4/000981/2009-MA (EFECTIVO A FECHA 01/12/2017)
220170004748	OPA	2018 929 22699	68.168,42	EDIFESA-PAVASAL GILET UTE.	ACUERDO COMPENSACION DE DEUDAS
220170004759	OPA	2018 338 22609	605,00	ASENSI GARCIA JESUS	FESTEJOS TAURINOS - ENCIERRO - AGOSTO 2015
220170004764	OPA	2018 151 22706	12.188,10	PEREZ ADELANTADO JOSE MARIA	PROYECTO MURO CONTENCIÓN CIUDAD JARDIN FASE 1ª
220170004765	OPA	2018 151 22706	12.100,00	PEREZ ADELANTADO JOSE MARIA	DIRECCION OBRA - RED AGUA POTABLE Y RED DE SANEAMIENTO URB. LA CALDERONA

SEGUNDO. Aplicar los gastos con cargo al Presupuesto del ejercicio 2018, en las siguientes aplicaciones a financiar mediante créditos extraordinarios vinculados a la modificación que acompaña al presente expediente.

CUARTO.- ACUERDO, EN SU CASO, RELATIVO A EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 04/2018:

Vista la incoación del expediente de modificación presupuestaria número 04/2018 de gastos que no pueden demorar su imputación presupuestaria hasta el próximo ejercicio, pues se trata de gastos no previstos en el presupuesto inicial estando prevista su financiación mediante RLTGG. Dado que no existe presupuesto suficiente y éste no puede ser objeto de ampliación.

Visto el informe de la Intervención Municipal de Fondos, así como la legislación aplicable referente a la aprobación, información, reclamaciones, recursos y publicidad de la modificación que obra en el expediente.

Conforme a lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal 2018, y con lo dispuesto en el artículo 177 del Texto Refundido de las Ley de Haciendas Locales, así como en los artículos 35 y ss. del RD 500/1990, de 20 de abril, relativos a la tramitación de expedientes de créditos extraordinarios con sujeción a lo dispuesto en la legislación vigente.

El Ayuntamiento Pleno, con 5 votos a favor y 3 abstenciones (PP, Compromis, IU), adopta el siguiente

ACUERDO:

UNICO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON EL SIGUIENTE DESGLOSE:

PRESUPUESTOS DE GASTOS

Apl.	Descripción	Importe
934.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN (SC)	58.844,70
1622.22799	RECOGIDA RSU (CE)	59.426,64
934.35200	INTERESES DE DEMORA (SC)	61.611,34
929.22699	IMPREVISTOS Y OTRAS FUNCIONES NO CLASIFICADAS (CE)	68.168,42
338.22609	FESTEJOS POPULARES (SC)	605,00
151.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (SC)	24.288,10
	TOTAL:	272.944,20

PRESUPUESTOS DE INGRESOS

Apl.	Descripción	Importe
87000	REMANENTE LIQUIDO PARA GASTOS GENERALES	272.944,20
TOTAL:		272.944,20

QUINTO.- ACUERDO, EN SU CASO, RELATIVO A MODELO PARA LA AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Visto que la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana establece el régimen de autoliquidación.

Comprobado por los servicios municipales que no existe modelo de autoliquidación del supracitado impuesto aprobado por esta Corporación municipal.

Vengo en proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el modelo de autoliquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que se adjunta como Anexo al presente acuerdo.

SEGUNDO.- Ordenar a los servicios municipales que procedan a su publicación

SEXTO.- MOCIONES.

Previa declaración de urgencia por la unanimidad de los asistentes a la sesión, el Ayuntamiento Pleno procede al debate y votación de las siguientes mociones:

A) MOCIÓN QUE ELEVA AL PLENO EL GRUPO MUNICIPAL IU RELATIVA A SENTENCIA SOBRE EL IMPUESTO DE LAS HIPOTECAS:

Tras su lectura, debate y votación, el Ayuntamiento Pleno, 8 votos a favor y 2 abstenciones (PP y Sr. Tirado de Miguel), aprueba la moción que trascrita resulta del siguiente tenor literal:

“El pasado 18 de octubre se dio a conocer la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que establece que serán los bancos, y no sus clientes, quienes asuman el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el más importante que se paga cuando se formaliza el préstamo de una hipoteca.

Este fallo responde a un pleito que mantenía con la Comunidad de Madrid la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid, entidad que preside Pedro del Cura, también alcalde de esta localidad gobernada por Izquierda Unida. El Alto Tribunal sentencia ahora a favor de la empresa municipal, al tiempo que cambia su propia opinión y varía la jurisprudencia hipotecaria.

El fallo se fundamenta en que el negocio que se inscribe es la hipoteca y que el único interesado en elevarla a escritura pública y su posterior inscripción es el prestamista, es decir, la entidad bancaria, “que sólo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca”.

Esta sentencia demuestra cómo hay responsables municipales que sí defienden los intereses de la gente, sobre todo de la más desfavorecida, por encima de los más poderosos, incluida la Banca privada y quienes les respaldan, como los distintos gobiernos del Partido Popular a nivel autonómico o municipal.

Estamos muy orgullosos que desde un municipio gobernado por Izquierda Unida hayamos conseguido que cientos de miles de trabajadoras y trabajadores de todo el Estado, a quienes los bancos obligaban hasta ahora a hacer frente a unos gastos hipotecarios que no les correspondían, se liberen de esta carga.

Pero, solo 24 horas después, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tomó la decisión de convocar un Pleno de esta Sala para dejar sin efecto la sentencia. Esta polémica decisión judicial implica la no aplicación de esta nueva jurisprudencia a los recursos pendientes de resolver sobre la misma materia, además de ser un intento para dejar sin efecto la sentencia mediante una resolución del Pleno de Sala.

Los bancos cada año multiplican sus beneficios y los salarios de sus directivos, mientras que quien se empobrece es nuestro pueblo son los ciudadanos, entre otros motivos por habernos obligado a pagar multimillonarios ‘rescates bancarios, mientras al unísono se padece una tributación a la banca escandalosamente reducida. Ha bastado que la banca proteste 24 horas contra esta sentencia, para que el Tribunal Supremo, servilmente, adopte esta cuestionable decisión y es que, según el artículo 18 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, ‘las sentencias se ejecutarán en sus propios términos’ y sólo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en la Ley. Por tanto, ni existe norma legal alguna que otorgue competencia a un Pleno de Sala del Tribunal Supremo para dejar sin efecto una sentencia firme ni el Supremo tiene competencias para valorar la ‘repercusión’ de sus sentencias: debe limitarse a aplicar estrictamente la ley y dejar que sean los poderes públicos competentes, en este caso el Poder Legislativo o el Ejecutivo, quienes valoren los efectos de esas sentencias y adopten medidas políticas si ello se entendiera necesario.

Es un despropósito que desde las más altas instancias judiciales se alegue para justificar esta decisión una supuesta ‘enorme repercusión económica’, mientras obvian que este mismo fallo es claramente beneficioso para la mayoría de personas de este país, que deben recurrir al crédito hipotecario para acceder a una vivienda.

Desde Izquierda Unida entendemos que nos encontramos ante un nuevo caso de arbitrariedad del Poder Judicial, un poder constitucional que en este caso no respeta su propia independencia y se somete al designio de los más poderosos en una actitud, cuanto menos, arbitraria.

Los mismos bancos que han esquilado la economía de este país y han contribuido a empobrecer a la gente estos últimos años ahora demuestran su capacidad para intervenir ante las instancias públicas. Los bancos han conseguido torcer a la Justicia hasta el punto de que deje de serlo.

Desde Izquierda Unida apostamos por un polo de banca pública que impida el chantaje que hace la banca privada. Además es imprescindible que, si este país quiere desarrollar una política industrial coherente, que favorezca a las pymes, facilite el acceso a la vivienda y poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo que reduzca el paro y sea sostenible económica y ecológicamente, ponga en marcha una banca pública.

Recientemente, el grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso propuso impulsar la creación de un polo de banca pública de depósitos de inversión a partir de Bankia y su fusión con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). En una proposición no de ley, el grupo confederal abogaba por no privatizar Bankia y que su prioridad sea la de financiar proyectos de infraestructuras, equipamientos públicos y proyectos empresariales de largo plazo.

España es uno de los pocos países de nuestro entorno que no cuenta con una banca pública. En Alemania, la cuota de mercado de la banca pública llega a alcanzar el 24% .y ha demostrado su capacidad de financiar necesidades de investigación e internacionalización. Hasta el propio Banco Mundial, en su informe ‘Repensando el papel del Estado en las finanzas’, mencionaba “el positivo papel que han jugado los bancos públicos en varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito” o “la evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis”.

Por eso, es imprescindible paralizar la venta de Bankia. No existe en el Memorando de Entendimiento y el 'Term Sheet' que firmo el Gobierno de Rajoy con las autoridades europeas ninguna especificidad sobre el límite para desinvertir en Bankia, sino que es la propia legislación española la que, de forma indirecta, fija un plazo. Por eso es fundamental que el actual ejecutivo descarte la desinversión. La fusión de Bankia y BMN sitúa a la nueva entidad como cuarto mayor banco por activos de España. En el se han inyectado más de 24 000 millones de euros de fondos públicos, 22.424 millones para Bankia y 1.845 millones para BMN. Es esencial el papel que pueda jugar Bankia-BMN como polo de banca pública para orientar al sector a desempeñar un papel como servicio público. Dirigir la gestión de los ahorros depositados en la banca pública a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo. Ese debe ser el objetivo de una banca pública que permitiría impulsar otra política económica centrada en la creación de una estructura económica dirigida a erradicar el paro estructural y los desequilibrios territoriales. Por todo ello, el grupo municipal de EUPV propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo

PRIMERO: Mostrar el rechazo de este Pleno a la inaudita y vergonzosa decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto su propia sentencia nº1505/2018 relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

SEGUNDO: Instar al Gobierno Municipal a que habilite los mecanismos necesarios para orientar a los/as vecinos/as en caso de que quieran exigir las devoluciones de las cantidades indebidamente cobradas.

TERCERO: Instar al Gobierno Central a que impulse la creación de un polo de banca pública, paralizando la venta de Bankia, y dirigir la gestión de los ahorros depositados en esta banca pública a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo.”

B) MOCIÓN QUE ELEVA AL PLENO EL GRUPO MUNICIPAL IU RELATIVA AL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS:

Tras su lectura, debate y votación, el Ayuntamiento Pleno, con 7 votos a favor y 3 abstenciones, aprueba la moción que transcrita resulta del siguiente tenor literal:

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace setenta años que la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acabada la segunda Guerra Mundial y derrotado el fascismo en la mayor parte de Europa, la humanidad trató de fijar unos principios básicos sobre los que todas las personas y sociedades pudieran desarrollarse en igualdad. Setenta años más tarde, no han dejado de ser una quimera. La realidad de las personas trabajadoras en el Estado español y en la mayor parte del planeta confirma que estos principios básicos son constantemente violados.

Mientras el Artículo 25 de la Declaración habla de la vivienda como un pilar básico para acceder al derecho a un nivel de vida adecuado. Las burbujas inmobiliarias y del alquiler, alimentadas por la especulación, hacen que cada vez sea más difícil tener un vivienda. En el Estado español hay más de 40.000 personas sin hogar mientras hay 3,5 millones de viviendas vacías que acumulan bancos y grandes propietarios, alentados por algunas Administraciones que en vez de garantizar el acceso, venden vivienda pública a fondo buitre para que especulen con ella. La turistificación creciente está empeorando esta situación y expulsando a los vecinos y vecinas de numerosos pueblos y barrios.

El Artículo 23 confirma el derecho al trabajo, a un salario igual por el mismo trabajo y a fundar sindicatos y sindicarse. No obstante, hay 3,2 millones de personas desempleadas en nuestro Estado, y continúan sin derogarse por completo las dos últimas reformas laborales que no solamente facilitan el despido, sino que permiten la precariedad extrema de aquellos que sí que tienen un salario. La brecha salarial es del 14,2% y las mujeres continúan ocupando los lugares con peores condiciones laborales y con mayor precariedad, sometidas a la segregación laboral por sexos y el denominado techo de cristal, que impide el acceso a lugares de mayor responsabilidad.

Además, continúa la represión al sindicalismo en las empresas, donde se repiten las denuncias por asedio a trabajadoras y trabajadores sindicados.

A pesar de que el Artículo 13 declara el derecho a la libre circulación y residencia, en vez de habilitar vías legales y seguras para la migración que garanticen este derecho y acaben con las mafias y las muertes en el Mediterráneo, se negocian nuevos acuerdos con Marruecos para empezar a deportar a niños y niñas no acompañadas. Se continúan vendiendo armas en Arabia Saudí para que su ejército las emplee en Yemen, o permitiendo que multinacionales españolas del sector textil exploten a trabajadoras en terceros países, y cuando las personas se ven obligadas a huir de este tipo de situaciones, la Unión Europea cierra sus fronteras y el Estado español rechaza dos de cada tres solicitudes de asilo, ultrajando permanentemente el artículo 14 de la Declaración.

El Artículo 4 prohíbe la esclavitud y la servidumbre, y aún así trabajadoras como las temporeras migrantes de Huelva que denunciaron acoso sexual, son explotadas sin escrúpulos y con total impunidad.

Estos son solo algunos ejemplos, aunque también podríamos referirnos al Artículo 9 sobre la detención arbitraria, el Artículo 19 sobre la libertad de expresión, o el Artículo

26 sobre el derecho a la educación, Todo eso nace de un sistema que propicia que el 1% más rico de la población española sea amo de alrededor de la mitad del país, mientras que la mitad más pobre nada más acumula un 7% de la riqueza. Desde el inicio de la crisis la población más rica del Estado ha cuadruplicado su riqueza sobre la parte más pobre de la población.

En este marco, con la limitación del gasto a las entidades locales y provincias es imposible garantizar el primer derecho humano, básico para el cumplimiento del resto: la igualdad. Que ineludiblemente pasa por garantizar unos servicios públicos básicos y de calidad para nuestra ciudadanía o el fomento del empleo público por las administraciones locales y provinciales, para evitar entre muchos otros problemas, que nuestros municipios continuen despoblándose de manera alarmante o que el 21,6% de la población viva en situación de pobreza. Por tanto, entendemos que la única manera de darle la vuelta a esta situación es con un cambio radical en la perspectiva de nuestras políticas, un cambio que ponga en el centro de las mismas a las personas y sus derechos. La unidad resulta imprescindible para combatir las políticas de recortes y precariedad a las que están sometidas nuestras ciudades y pueblos, porque es el primer paso para que conquistemos estos derechos y podamos realmente vivir con igualdad y dignidad.

Por todo ello, el grupo municipal de EUPV propone Al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.

Manifiestar el compromiso de emprender medidas municipales, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional.

SEGUNDO.

Elaborar y aprobar un Plan Municipal de Vivienda, o actualizar el planeamiento existente, que contemple y regule debidamente las medidas de fomento para evitar la desocupación permanente e injustificada de viviendas.

TERCERO.

Iniciar una campaña de colaboración ciudadana para detectar viviendas turísticas sin licencia, buscando a través de Internet la colaboración y el compromiso de los y las visitantes para combatir la economía sumergida y también facilitando a los vecinos o vecinas la presentación de quejas por las molestias ocasionadas por estos alojamientos.

CUARTO.

Modificar la normativa urbanística para reconocer el fenómeno de uso como vivienda turística:

Estudiando la posibilidad de reconocer la "presunción de uso turístico" cuando los viviendas se ofrezcan o comercialicen por cualquier canal de oferta turística³.

Limitando el inicio de nuevas actividades por superficies, plantas, perímetros, etc., teniendo en cuenta el índice de presión turística.

QUINTO.

Instar al Gobierno Central a modificar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y a promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con el fin de dar prioridad al gasto necesario para asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales por encima de los créditos para satisfacer los pagos de la deuda pública.

SEXTO.

Instar al Gobierno de la Nación a la eliminación en los Presupuestos Generales del Estado de las restricciones a la oferta de empleo público y las restricciones de aumento del Capítulo I.

SÉPTIMO.

Declarar todos los servicios municipales como prioritarios y por tanto solicitar la expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para poder ejercer las facultades propias de gobierno de nuestro municipio con plena autonomía organizativa.

OCTAVO.

Instar al Gobierno Central a la derogación de las dos Reformas Laborales, las de 2010 y 2012, por el hecho de que sus consecuencias nefastas para la calidad de la ocupación y por poner en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones.

NOVENO.

Exigir al Gobierno que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de asilo y acabe con la práctica de las devoluciones en caliente y las devoluciones expresas. Exigir además que se habilitan vías legales y seguras de acceso a España para que migrantes y demandantes de asilo no se vean obligados a poner sus vidas en peligro.

DÉCIMO.

Exigir al Gobierno del Estado al replanteo del procedimiento de atención social a solicitantes de asilo en España. Estableciendo sistemas de coordinación y financiación eficaces con las Comunidades Autónomas y las ciudades y municipios que permitan contar con información actualizada de los contingentes de personas refugiadas trasladadas a nuestros municipios así como información sobre su llegada efectiva y la previsión anual.

UNDÉCIMO.

Exigir la previsión de un mecanismo para cofinanciar los costes derivados de los procesos de atención e integración de las personas migrantes y refugiadas, facilitando el

acceso a los municipios a los Fondo FAMI y a todos aquellos fondos europeos a los que los municipios puedan optar para el desarrollo de Programas municipales de acogida complementarios al Programa Estatal, tal como sucede en otros países de la Unión Europea.

DOUDÉCIMO.

Instar al Gobierno Central a la derogación o modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, de cara a la elaboración de un texto que salvaguarde la libertad de expresión y sus connaturales derechos de reunión y manifestación.”

SEPTIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA:

No habiendo asuntos de urgencia, el Sr. Alcalde ordena el pase al siguiente punto del Orden del Día.

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS:

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal IU pregunta si se ha visto el proyecto del nuevo colegio.

El Sr. Alcalde responde que el proyecto está entregado en Conselleria y que se está informando.

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal IU pregunta si se sabe cuanto cuesta.

El Sr. Alcalde responde que casi cuatro millones. Prosigue el Sr. Alcalde diciendo que el proyecto entregado es el definitivo y que en Conselleria le han dicho que están muy contentos con él, y que, una vez aprobado, vendrá el procedimiento de licitación.

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, se levantó ésta por la Presidencia, siendo las veintiuna horas doce minutos del día veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe y certifico.